



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: . Anexos: No.
Radicación #: 2018EE253763 Proc #: 4231507 Fecha: 30-10-2018
Tercero: 39663378 – MARIELA GRACIA SALGADO
Dep Radicadora: DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL Clase Doc: Externo
Tipo Doc: Acto Administrativo

AUTO N. 05585

“POR EL CUAL SE DECRETAN LA PRÁCTICA DE PRUEBAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En cumplimiento de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, el Decreto Ley 2811 de 18 de diciembre de 1974, en armonía con lo establecido en el Decreto 948 de 5 de junio de 1995, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, la Resolución 627 de 7 de abril de 2006, la Resolución 6919 de 2010 de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Ley 1333 de 21 de julio 2009, el Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, y las facultades conferidas por la Resolución 1466 del 26 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 02566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 del 4 de mayo de 2009

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, encontró mérito suficiente para dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental mediante Auto No. 01179 del 30 de junio del 2013, en contra de la señora **MARIELA GARCIA SALGADO** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.663.378, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **CHALO BAR LAS NEGRAS**, con la matrícula mercantil No. 0002169856 del 12 de enero de 2012, ubicado en la calle 16 I Bis No. 112 C – 20 de la localidad de Fontibón de esta Ciudad, en los términos del Artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Que, el anterior Auto, fue publicado en el Boletín Legal de la Secretaria Distrital de Ambiente el día 12 de marzo de 2015, comunicado al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios mediante radicado No. 2013EE113330 de 03 de septiembre de 2013 y notificado por aviso a la señora **MARIELA GARCIA SALGADO**, el día 02 de abril de 2014, con constancia de ejecutoria del 03 de abril del mismo año.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

Que a través del Auto No. 01035 del 16 de marzo de 2018, expedido por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, se dispuso:

ARTÍCULO PRIMERO. - Formular en contra de la señora **MARIELA GARCIA SALGADO**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 39.663.378, en calidad de propietaria y responsable del establecimiento de comercio denominado **CHALO BAR LAS NEGRAS**, registrado con la Matrícula Mercantil No. 0002169856 del 12 de enero de 2012, ubicado en la Calle 16 I Bis No. 112C-20 de la Localidad de Fontibón de la Ciudad de Bogotá D.C., el siguiente Pliego de Cargos conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo, así:

Cargo Único. - Por generar ruido que traspasó los límites de la propiedad ubicada en la Calle 16 I Bis No. 112C-20 de la Localidad de Fontibón de la Ciudad de Bogotá D.C., mediante el empleo de una (1) Rockola y dos (2) Baffles, superando los límites permitidos en **-14,69dB(A) en Horario Nocturno, catalogado como un Aporte Contaminante Muy Alto, en un Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado, Zona Residencial General, debido a que el resultado de la medición fue de 69,69dB(A) en Horario Nocturno** y el límite máximo permisible es de **55dB(A) en Horario Nocturno**, vulnerando con ello el Artículo 45 del Decreto 948 de 1995, en concordancia con el Artículo 9 Tabla No. 1 de la Resolución 627 de 2006.

Que, el anterior Auto fue notificado personalmente a la señora **MARIELA GARCIA SALGADO** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.663.378, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **CHALO BAR LAS NEGRAS**, ubicado en la calle 16 I Bis No. 112 C – 20 de la localidad de Fontibón de esta Ciudad, el día 10 de abril de 2018.

Que, a su vez, verificado el Registro Único Empresarial y Social de la Cámara de Comercio (RUES) se pudo determinar que la señora **MARIELA GARCIA SALGADO**, se encuentra registrada como persona natural con matrícula mercantil No. 2169855 del 12 de enero de 2012.

II. DESCARGOS

Que la señora **MARIELA GARCIA SALGADO** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.663.378, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio **CHALO BAR LAS NEGRAS**, ubicado en la calle 16 I Bis No. 112 C – 20 de la localidad de Fontibón de esta Ciudad, presentó escrito de descargos contra el Auto No. 01035 del 16 de marzo de 2018, a través del radicado No. 2018ER85470 del 19 de abril de 2018, en el cual se solicitó tener como pruebas las siguientes:

“ **PRUEBAS**

Solicito se tenga como pruebas a favor de la parte demandada

1. *Fotografías (anexo) de los cambios realizados para resarcir la acusación de la presente*
2. *Si es necesario programar concepto técnico para avalar las mencionadas modificaciones.”*



III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

El régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el Artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso y el derecho a la defensa, en virtud del cual, *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”* y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

El debido proceso y el derecho a la defensa en Colombia son unos mecanismos que tiene todo ciudadano para defenderse de las acciones administrativas y judiciales de las diferentes entidades del Estado y privadas. Es considerado este derecho como parte esencial y fundamental del Estado Social de Derecho y de sostenimiento de la Democracia, porque impide las arbitrariedades de los gobernantes con los ciudadanos.

“Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.” **Sentencia C-025/09, La Sala Plena de la Corte Constitucional Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil nueve (2009).**

DEL PROCEDIMIENTO – DE LA LEY 1333 DE 2009 Y DEMÁS NORMAS

Que, desde el punto de vista procedimental, se tiene en cuenta que con base en lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad Ambiental está investida de la facultad para decretar la práctica de las pruebas consideradas de interés para el procedimiento Sancionatorio de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.

Que, la Ley 1333 de 2009, señala en su **“Artículo 19. Notificaciones.** *En las actuaciones sancionatorias ambientales, las notificaciones se surtirán en los términos del Código de Procedimiento Administrativo.”*



Que, en cuanto a los descargos y los términos de Ley para la presentación de los mismos, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. *Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.”*

Que, desde el punto de vista procedimental, se tiene en cuenta que con base en lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad Ambiental está investida de la facultad para decretar la práctica de las pruebas consideradas de interés para el procedimiento Sancionatorio de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. La práctica de las pruebas consideradas conducentes, se deben llevar a efecto dentro de los treinta (30) días, término que podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.

Que el tratadista Nattan Nisimblat en su libro *“Derecho Probatorio - Principios y Medios de Prueba en Particular Actualizado con la Ley 1395 de 2010 y la Ley 1437 De 2011”*, en las páginas 131 y 132, al respecto de los requisitos intrínsecos de la prueba, definió lo siguiente:

“2.3.1.1. Conducencia.

La conducencia es la idoneidad del medio de prueba para demostrar lo que se quiere probar y se encuentra determinada por la legislación sustantiva o adjetiva que impone restricciones a la forma como debe celebrarse o probarse un determinado acto jurídico. (...)

2.3.1.2. Pertinencia.

(...). La pertinencia demuestra la relación directa entre el hecho alegado y la prueba solicitada. Bien puede ocurrir que una prueba sea conducente para demostrar un hecho determinado, pero que, sin embargo, no guarde ninguna relación con el “tema probatorio”. Son ejemplos de pruebas impertinentes las que tienden a demostrar lo que no está en debate (...)

2.3.1.3. Utilidad.

En desarrollo del principio de economía, una prueba será inútil cuando el hecho que se quiere probar con ella se encuentra plenamente demostrado en el proceso, de modo que se torna en innecesaria y aún costosa para el debate procesal. Para que una prueba pueda ser considerada inútil, primero se debe haber establecido su conducencia y pertinencia. En virtud de este principio, serán inútiles las pruebas que tiendan a demostrar notorios, hechos debatidos en otro proceso o hechos legalmente presumidos.”



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

Que el Consejo de Estado¹, en providencia del 19 de agosto de 2010, se refirió de la siguiente manera frente a la noción de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad de las pruebas:

“El artículo 168 del C.C.A. señala que, en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración, son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 178 del C. de P.C. dispone: “Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”.

De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad.

Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley.”

Que, con base a la anterior definición, es necesario señalar lo que el Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, determina en cuanto a las pruebas:

1. Que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, esto es la necesidad de la prueba (Artículo 164 del C.G.P.)
2. Que sirven como pruebas, la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez (Artículo 165 del C.G.P.)
3. Que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba (Artículo 167 del C.G.P.)
4. Que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y que el juez rechazará *in limine* las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas (Artículo 168 del C.G.P.)

¹ Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, CP Hugo Fernando Batidas Barcenas, del 19 de Agosto de 2010, Radicación 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093)



IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARIA

DEL CASO CONCRETO

Que, en lo concerniente a las actuaciones administrativas obrantes en el expediente No. **SDA-08-2013-233**, perteneciente al procedimiento adelantado en contra de la señora **MARIELA GARCIA SALGADO** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.663.378, registrada como persona natural con matrícula mercantil No. 2169855 del 12 de enero de 2012, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **CHALO BAR LAS NEGRAS**, con la matrícula mercantil No. 0002169856 del 12 de enero de 2012, ubicado en la calle 16 I Bis No. 112 C – 20 de la localidad de Fontibón de esta Ciudad, es procedente hacer un análisis del concepto de la prueba y sus requisitos para así poder decretar o incorporar las mismas.

Que descendiendo al caso *sub examine*, la señora **MARIELA GARCIA SALGADO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.663.378 registrada como persona natural con matrícula mercantil No. 2169855 del 12 de enero de 2012, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **CHALO BAR LAS NEGRAS**, presentó escrito de descargos y solicitud de pruebas contra el Auto No. 01035 del 16 de marzo de 2018, siendo esta la oportunidad procesal con que contaba la investigada para aportar y solicitar la práctica de pruebas que estimara pertinentes y conducentes, de conformidad a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 y por ende esta Autoridad Ambiental determina que es procedente hacer un análisis de las pruebas y sus requisitos para así poder decretar o incorporar las mismas

Que, en relación con las pruebas solicitadas mediante el radicado 2018ER85470 del 19 de abril de 2018, cabe anotar que, en relación con la realización de una nueva visita técnica y las fotografías de las modificaciones realizadas en el establecimiento, a través de las cuales se pretende demostrar acciones concretas de mejoramiento, se tiene que las mismas no son pertinentes, necesarias ni útiles, por cuanto no corresponden a la situación fáctica y jurídica objeto de estudio, y no desvirtúa los resultados obtenidos en la medición realizada el día 28 de enero de 2012, al respecto cabe mencionar que, las infracciones en materia de ruido son de ejecución instantánea, es decir, que desde el momento en que se verifica el incumplimiento de lo estipulado en la Resolución 627 de 2006, esta Secretaría tiene la potestad para iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental contemplado en la Ley 1333 de 2009.

Que, en consecuencia, esta Secretaría dispondrá abrir la etapa probatoria de acuerdo con el procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra de la señora **MARIELA GARCIA SALGADO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.663.378, registrada como persona natural con matrícula mercantil No. 2169855 del 12 de enero de 2012, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **CHALO BAR LAS NEGRAS**, con la matrícula mercantil No. 0002169856 del 12 de enero de 2012, ubicado en la calle 16 I Bis No. 112 C – 20 de la localidad de Fontibón de esta Ciudad, incorporando para el presente caso las siguientes pruebas documentales:



1. Radicado No.2011ER121542 del 27 de septiembre de 2011
2. El concepto técnico No. 07479 del 26 de octubre de 2012, el cual concluye que el nivel equivalente del aporte sonoro de las fuentes específicas (**Leq_{emisión}**) fue de **69.69 dB(A) en horario nocturno, para un Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado**, con sus respectivos anexos tales como:
 - Acta de Visita de Seguimiento y Control Ruido de fecha 28 de enero de 2012.
 - Certificado de calibración electrónica del sonómetro, tipo SOLO 01, con No de serie 30443, con fecha de calibración electrónica de 28 de diciembre de 2010.
 - Certificado de calibración acústico, tipo CAL 21, con No. serie 34682960, con fecha de calibración electrónica del 27 de diciembre de 2010.

Que, la conducencia de las pruebas relacionadas anteriormente, se fundamenta en que son el medio idóneo para demostrar la existencia de los hechos que dieron origen al incumplimiento de normas de carácter ambiental, teniendo en cuenta que así lo señala el Artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica que la Autoridad Ambiental Competente, que para el presente caso es la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como Visitas Técnicas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.

Que son pertinentes las pruebas en mención, toda vez que demuestran una relación directa entre los hechos acontecidos en tiempo, modo y lugar de la ejecución de la conducta, la cual es instantánea y fue determinada por las mediciones realizadas a las fuentes generadoras de emisión y ejecutadas en la Visita Técnica de Seguimiento y Control Ruido, por sobrepasar los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas ambientales respectivas.

Que corolario de lo anterior, estas pruebas resultan útiles, puesto que con ellas se establece la ocurrencia de los hechos materia de controversia que aún no se encuentran demostrados con otra, haciendo del Radicado No.2011ER121542 del 27 de septiembre de 2011 y del concepto técnico No. 07479 del 26 de octubre de 2012, con sus respectivos anexos, anteriormente mencionados, como un medio probatorio necesario para demostrar la ocurrencia de los hechos constitutivos de infracción ambiental.

Que en consecuencia a lo expuesto se tendrá como prueba los documentos relacionados en los incisos anteriores, por ser el medio probatorio conducente, pertinente y útil para el presente caso, a fin de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental, de conformidad con lo establecido en la parte motiva y resolutive del presente Acto Administrativo.



V. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA

Que es función de la Secretaría Distrital de Ambiente, controlar el cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, en consecuencia, emprender las acciones de policía que sean pertinentes, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las medidas que correspondan a quienes infrinjan las mencionadas normas.

Que el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Secretaría para ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que así mismo, el Numeral 12 ibídem establece como función a la Autoridad Ambiental:

“Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos”.

Que el Artículo 5 del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su Literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que de conformidad con lo contemplado en la Resolución 1466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 02566 del 15 de agosto de 2018, en la cual el Secretario Distrital de Ambiente delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de:

“1. Expedir los actos administrativos de impulso relacionados con los procesos sancionatorios. (...)”

Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental;



DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - Abrir a pruebas dentro del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta entidad mediante el Auto No. 01179 del 30 de junio del 2013, en contra de la señora **MARIELA GARCIA SALGADO** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.663.378, registrada como persona natural con matrícula mercantil No. 2169855 del 12 de enero de 2012, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **CHALO BAR LAS NEGRAS**, registrado con la matrícula mercantil No. 0002169856 del 12 de enero de 2012, ubicado en la calle 16 I Bis No. 112 C – 20 de la localidad de Fontibón de esta Ciudad.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar la incorporación al procedimiento sancionatorio de las siguientes pruebas:

1. Radicado No.2011ER121542 del 27 de septiembre de 2011
2. El concepto técnico No. 07479 del 26 de octubre de 2012, el cual concluye que el nivel equivalente del aporte sonoro de las fuentes específicas (**Leq_{emisión}**) fue de **69.69 dB(A) en horario nocturno, para un Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado**, con sus respectivos anexos tales como:
 - Acta de Visita de Seguimiento y Control Ruido de fecha 28 de enero de 2012.
 - Certificado de calibración electrónica del sonómetro, tipo SOLO 01, con No de serie 30443, con fecha de calibración electrónica de 28 de diciembre de 2010.
 - Certificado de calibración acústico, tipo CAL 21, con No. serie 34682960, con fecha de calibración electrónica del 27 de diciembre de 2010.

ARTICULO TERCERO: Negar las pruebas solicitadas mediante Radicado 2018ER85470 del 19 de abril de 2018, por la señora, **MARIELA GARCIA SALGADO** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.663.378, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **CHALO BAR LAS NEGRAS**, ubicado en la calle 16 I Bis No. 112 C – 20 de la localidad de Fontibón de esta Ciudad, conforme los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente Auto.

ARTICULO CUARTO. - Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a la señora **MARIELA GARCIA SALGADO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.663.378 en la calle 16 I Bis No. 112 C – 20 de la localidad de Fontibón de esta Ciudad, según lo establecido en los Artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

PARÁGRAFO. - La persona natural y/o jurídica señalada como presunta infractora en el artículo primero del presente acto, su apoderado o autorizado, deberá presentar documento idóneo que permita efectuar la notificación.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, dentro de los diez (5) días siguientes a su notificación, con el lleno de los requisitos legales contemplados en los según lo establecido en los Artículos 50, 51 y subsiguientes del Decreto 01 de 1984., de conformidad con lo expuesto en el Parágrafo Primero del Artículo 26 de la ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de octubre del año 2018

**CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

Elaboró:

PAOLA ANDREA GRANADOS GRAJALES	C.C: 1010173834	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20180304 DE 2018	FECHA EJECUCION:	08/10/2018
--------------------------------	-----------------	----------	--------------------------------	------------------	------------

Revisó:

CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA	C.C: 35503317	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	30/10/2018
---------------------------------	---------------	----------	------------------	------------------	------------

CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA	C.C: 35503317	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	11/10/2018
---------------------------------	---------------	----------	------------------	------------------	------------

OSCAR ALEXANDER DUCUARA FALLA	C.C: 79842782	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	08/10/2018
-------------------------------	---------------	----------	------------------	------------------	------------

GINA PATRICIA BARRIGA POVEDA	C.C: 52957158	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20181061 DE 2018	FECHA EJECUCION:	08/10/2018
------------------------------	---------------	----------	--------------------------------	------------------	------------

OSCAR ALEXANDER DUCUARA FALLA	C.C: 79842782	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	11/10/2018
-------------------------------	---------------	----------	------------------	------------------	------------

Aprobó:

Firmó:

CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA	C.C: 35503317	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	30/10/2018
---------------------------------	---------------	----------	------------------	------------------	------------

EXP-SDA-08-2013-233